CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
23 NOV. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 11:56 a.m.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE RELATORÍA Y AGENDA
23 NOV 2022
Recibido por: 12:15

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624".

COMISIÓN DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor presidente:

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624".

Luego de la exposición y debate en la Sétima Sesión Ordinaria de fecha 2 de noviembre de 2022, se acordó por mayoría aprobar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624"; con dieciséis (16) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, José Enrique Jerí Oré, Carlos Antonio Anderson Ramírez y Diana Carolina Gonzales Delgado, en calidad de accesitaria de Alejandro Enrique Cavero Alva; uno (01) en contra, de la Señora Congresista Isabel Cortez Aguirre; y cuatro (04) abstenciones, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Carlos Javier Zeballos Madariaga.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE RELATORÍA Y AGENDA
23 NOV 2022
Recibido por:
Hora 12:25am

I. SITUACIÓN PROCESAL DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 3195/2022-PE ingresó al Área de Trámite Documentario el 30 de setiembre de 2022. Fue decretado el 04 de octubre de 2022 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y a la Comisión de Energía y Minas como primera y segunda comisión dictaminadora respectivamente.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 3195/2022-PE tiene por objeto prorrogar la vigencia de la Ley 27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, y la Ley 27624, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos, a fin de promover la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos y así propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.

III. MARCO NORMATIVO

3.1 Constitución Política del Perú.

3.2 Ley 27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración.

3.3 Ley 27624, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos.

3.4 Decreto de Urgencia 021-2019, Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de las Leyes Nº 27623 y Nº 27624.

IV. OPINIONES SOLICITADAS

4.1 Cámara de Comercio de Lima - CCL

Mediante Oficio 0397-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 11 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Cámara de Comercio de Lima.

4.2 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP

Mediante Oficio 0400-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 11 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.

4.3 Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía - SNMPE

Mediante Oficio 0409-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 11 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía.

V. OPINIONES RECIBIDAS

5.1 Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía - SNMPE

Mediante DE-C-140-22 recibido el 26 de octubre de 2022, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía brinda respuesta al pedido de opinión formulado en relación al Proyecto de Ley 3195/2022-PE manifestando que, dado que es una medida positiva y constituye una medida que contribuirá a la promoción de las inversiones que requiere el país para seguir avanzando en la reactivación de nuestra economía expresa su opinión **a favor** de la aprobación del proyecto de ley.

VI. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

6.1 La importancia de la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú

Históricamente la actividad minera y de hidrocarburos ha sido de gran relevancia en el crecimiento económico del país; principalmente, a través de la producción y generación de empleo. Es así que en los últimos 70 años, el promedio de participación de estas actividades en el Producto Bruto Interno (PBI) ha sido de 13%. Cabe resaltar que, en el 2021 este valor llegó a 11,6%, a pesar del contexto de la pandemia de la COVID-19 en la que aún nos encontramos.

En el siguiente gráfico se puede apreciar en mayor detalle la evolución del promedio de participación en el PBI de las actividades de minería e hidrocarburos desde 1950 al 2021.

Gráfico 1. Participación en el PBI de la minería e hidrocarburos (Porcentaje)

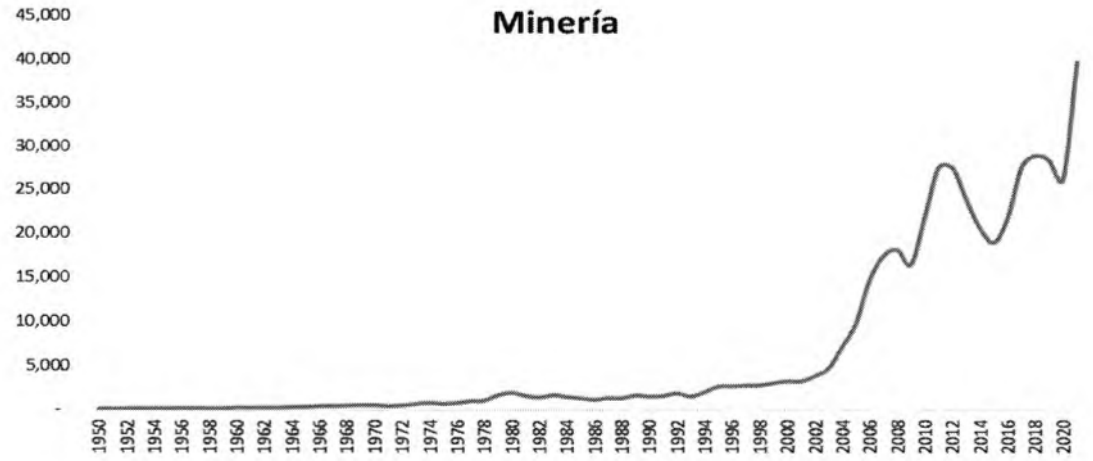


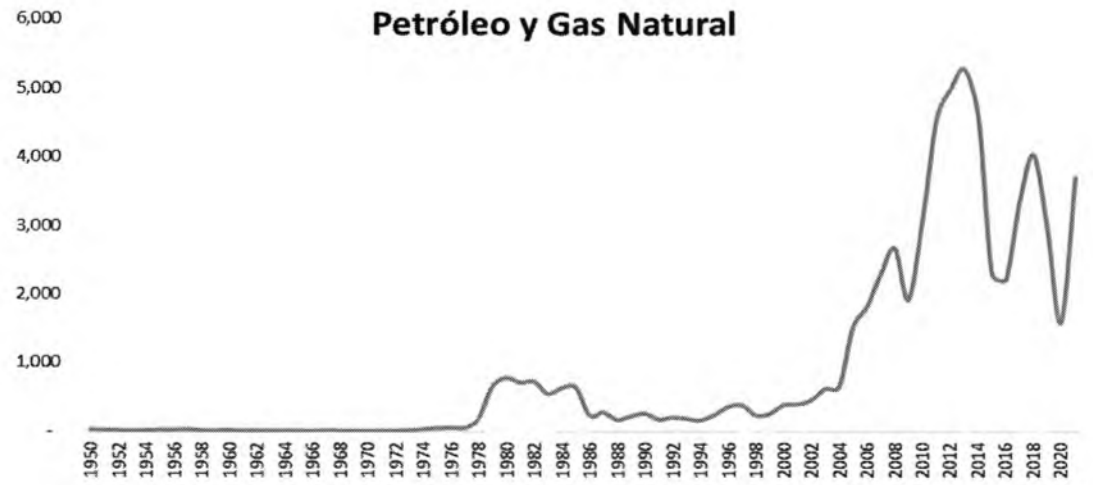
Fuente: BCRP
Elaboración propia

El desarrollo de estas actividades a lo largo de los años ha mostrado incrementos en la producción de minerales e hidrocarburos que se ha traducido en un gran avance en la exportación de los mismos y en otros beneficios para el país. Es así que sólo en los últimos 20 años, las exportaciones mineras han crecido diez veces, pasando de $ 3,809 millones en el 2002 a $ 39,680 millones en el 2021. En el mismo periodo, las exportaciones de petróleo y gas natural crecieron ocho veces, pasando de $ 451 millones a $ 3,711 millones.

En el siguiente gráfico se puede apreciar en mayor detalle el crecimiento de las exportaciones mineras y de petróleo desde el año 1950 hasta el 2020.

Gráfico 2. Exportaciones de productos mineros y petróleo y gas natural (US$ Millones)





Fuente: BCRP
Elaboración propia

El crecimiento económico producido por el avance de estos sectores ha permitido que la recaudación de los ingresos fiscales se incremente y que se generen mayores recursos para el desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales. Es así que, en los últimos 10 años, se han transferido a los Gobiernos Locales y Regionales alrededor de S/ 6 400 millones anuales por conceptos de canon y regalías del sector minería e hidrocarburos.

6.2 Bajos niveles de inversión y de reservas

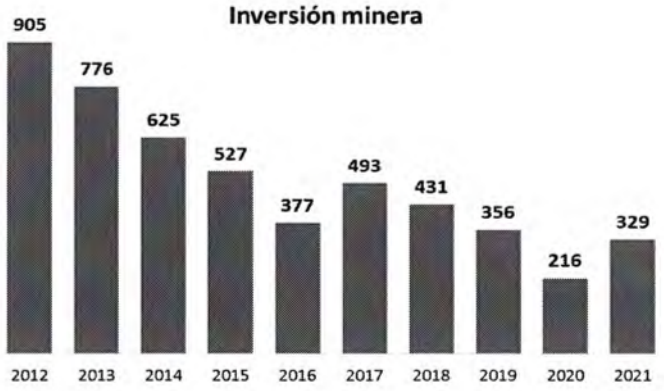
No obstante el crecimiento de las cifras vinculadas al desarrollo de las actividades de minería e hidrocarburos señaladas en los párrafos precedentes, es importante hacer mención que, en los últimos años, se ha venido apreciando el descenso del país en el Índice Fraser de atractivo para invertir.

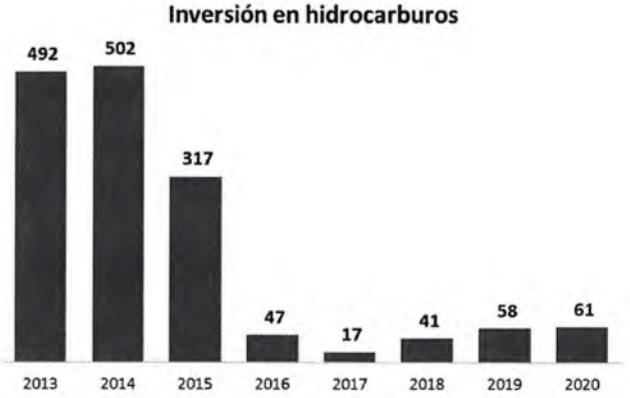
Así, para el 2021, el Índice Fraser de atractivo para invertir posiciona al Perú en el puesto 42 de 84 ciudades y países incluidos en la comparativa. Observándose que dicho indicador muestra una tendencia decreciente para el país en los últimos cuatro años.

En esa línea, las inversiones en exploración en los últimos años se han venido reduciendo tanto en el rubro de la minería como en el de hidrocarburos. Así, en el caso del sector minero, las inversiones han pasado de US$ 905 millones en el 2012 a US$ 329 millones en el 2021 y en el sector hidrocarburos la caída ha sido mucho mayor, pasando de US$ 492 millones en el 2013 a US$ 61 millones en el 2020.

La reducción de cifras de inversión antes mencionada ha tenido repercusión en los niveles de reservas estimadas de minerales para los próximos años. Es así que, según los datos de reservas estimadas del año 2019, en el país quedan 16 años de cobre, 13 años de plata, 8 años de plomo, 5 años de zinc y oro y 4 años de estaño. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de los niveles de inversión y reservas antes mencionadas.

Gráfico 3. Inversión en exploración minera e hidrocarburos (US$ Millones) y niveles de reservas (años y TMF)







Fuente: Minem

6.3 Necesidad de impulso económico

En la actualidad el Perú se encuentra en un contexto post pandemia caracterizado por un bajo crecimiento económico y altos niveles de inflación, el mismo que se ve complicado por la continua reducción de las proyecciones de crecimiento a nivel mundial y local. En ese sentido, es necesario promover la inversión en el país de manera que la dinámica económica producida por las actividades de minería e hidrocarburos puedan generar empleo y recursos para seguir desarrollando el país.

Sobre el particular, cabe hacer mención que dentro del recientemente lanzado Plan "Impulso Perú" del Poder Ejecutivo, se observa que entre las medidas para generar

mejores condiciones para el gasto privado se plantea la presentación de un Proyecto de Ley para impulsar la inversión en exploración en minería e hidrocarburos a través de la prórroga de la vigencia de las Leyes 27623 y 27624 que devuelve el impuesto General a las Ventas (IGV) a las actividades de inversión en exploración minera e hidrocarburos. La presentación del Proyecto de Ley 3195/2022-PE, materia del presente análisis, que devuelve el impuesto General a las Ventas IGV y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a las actividades de inversión en exploración minera e hidrocarburos por un plazo de 5 años, deviene entonces en la materialización de dicha propuesta.

6. 4 Exploración en minería y la Ley 27623

La Ley 27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, otorga a los titulares de concesiones mineras el derecho a la devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que les sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus actividades durante la fase de exploración; para lo cual los titulares de concesiones mineras deberían cumplir con celebrar un Contrato de Inversión en Exploración con el Estado.

Es así que desde la dación de la Ley 27623 y las sucesivas normas modificatorias de la misma que prorrogaron su vigencia[1]; es decir, durante el periodo 2003 – 2021, se acogieron a la Ley 27623 un total de 181 proyectos de exploración minera.

Los 181 proyectos de exploración minera antes mencionados comprometieron un monto de inversión en exploración de US$ 1 699 millones; de los cuales 94 solicitaron y recibieron devoluciones por S/ 455 millones. A su vez, de estos

[1] Decreto Legislativo 963, publicado el 24 diciembre 2006, Ley 29493, publicada el 05 enero 2010, Ley 29966, publicada el 16 diciembre 2012, Ley 30404, publicada el 30 diciembre 2015, Ley 30899, publicada el 28 diciembre 2018 y Decreto de Urgencia 021-2019, publicado el 05 diciembre 2019

proyectos, 11 dieron origen a proyectos mineros en explotación con un monto de inversión comprometida igual a US$ 15 mil millones.

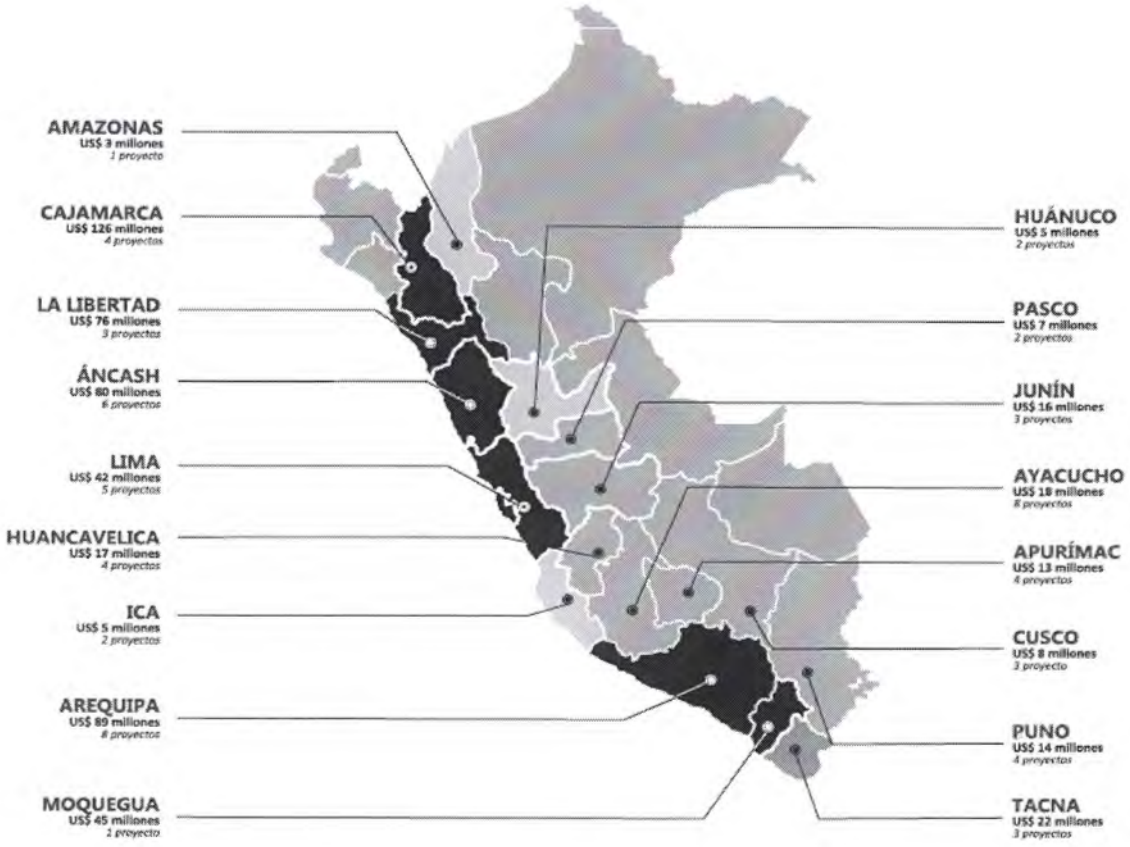
La consecuencia derivada del avance de los proyectos antes mencionados ha sido la generación de empleos formales, el desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales y se ha constituido en una importante fuente de recursos para el Tesoro. Así pues, en el 2021 el aporte de este sector alcanzó los S/ 19 510 millones en tributos, representando el 16,4% del total nacional.

En el contexto antes indicado y haciendo una revisión de la última Cartera de Exploración Minera, a febrero del 2022, se puede observar que esta contempla 63 proyectos con un monto global de inversión de US$ 586 millones. Estos proyectos se encuentran en alguna de las siguientes tres etapas:

- Ejecutando o por ejecutar exploración;
- Evaluación de autorización de exploración; y,
- Evaluación de Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).

Sólo el 36% de las inversiones en mención está próxima a iniciar trabajos de exploración, es decir, el 64% (US$ 373 millones) aún requiere continuar con el proceso para iniciar exploraciones por lo que resulta necesario promoverse la continuación de las mismas a través de incentivos o beneficios tributarios como los propuestos en la iniciativa legislativa materia de análisis. En el siguiente gráfico se puede apreciar un mapa con la ubicación por departamento de las inversiones en proyectos mineros, detallando el monto comprometido y el número de proyectos involucrados.

Gráfico 4. Inversión en proyectos de exploración de minas según ubicación



Fuente: Minem

6.5. Exploración en hidrocarburos y la Ley 27624

La Ley 27624, Ley que Dispone la Devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la Exploración de Hidrocarburos, se otorga a las empresas que suscriban los Contratos o Convenios a que se refiere la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, e implica el derecho a la devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), así como de cualquier otro impuesto al consumo, que les sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus actividades durante la fase de exploración.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), para atraer inversionistas petroleros al país, los países de la región ofrecen beneficios similares al establecido en la Ley 27624 antes mencionada; por tanto, este beneficio iguala o mejora la competitividad del país, y complementa el alto potencial hidrocarburífero; el mismo que cuenta con el 60% de las cuencas inexploradas, siendo las zonas de selva y de aguas profundas del zócalo continental las de mayor prospectividad geológica para la exploración en hidrocarburos.

De acuerdo a PERUPETRO, en el periodo de 1990 al 2021 se realizaron compromisos de inversión por un total de 164 proyectos de hidrocarburos, con una inversión total de US$ 19 239 millones, de los cuales US$ 6 212 millones (32%) corresponden a la fase de exploración.

De los 164 proyectos de hidrocarburos, 58 proyectos se acogieron al beneficio tributario con un monto de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) de US$ 287,7 millones. En el mismo periodo, se iniciaron 38 proyectos de explotación de hidrocarburos, con una inversión de US$ 13 027 millones, de los cuales sólo 7 proyectos estuvieron acogidos en su fase de exploración a los beneficios tributarios de la Ley 27624.

En estos casos, al igual que lo sucedido con los proyectos mineros, su desarrollo ha permitido la generación de empleos formales, a la par de constituirse en otra importante fuente de recursos para el Tesoro. Así pues, en el 2021 el aporte de este sector alcanzó los S/ 3 540 millones en tributos, representando el 3% del total nacional.

6.6. Sobre la necesidad de prorrogar el beneficio tributario

Como bien señala la exposición de motivos del Proyecto de Ley 3195/2022-PE, en el contexto económico actual, caracterizado por un menor dinamismo, resulta particularmente importante el establecimiento de políticas orientadas a mejorar las condiciones y el entorno económico a fin de coadyuvar con la aceleración del

crecimiento económico del país, ello con la finalidad de contribuir con la recuperación económica e impulsar una mayor inversión en proyectos de gran envergadura, como son los proyectos de exploración minera y de hidrocarburos.

En atención a lo expuesto, con el objetivo de impulsar el gasto privado y la recuperación de la confianza de los agentes económicos, el proyecto de ley materia de análisis plantea una medida tendiente a promover un entorno favorable para el desarrollo de inversiones e impulsar la reactivación de la economía, incluyendo mecanismos de alivio tributario orientados a fomentar la inversión privada.

En efecto, estando fijado el vencimiento de la vigencia de los beneficios tributarios de las Leyes 27623 y 27624 para el 31 de diciembre de 2022 conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia 021-2019 y, considerando que la eliminación de los mismos sería sumamente perjudiciales en la medida que afectarían el desarrollo de más proyectos mineros y de hidrocarburos e implicarían la pérdida de los ingresos provenientes de estas actividades, la Comisión encuentra conveniente y necesaria la emisión de una norma con rango de ley que permita asegurar la continuidad de las operaciones en mención.

Así pues, la prórroga del beneficio de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) establecido en las Leyes 27623 y 27624, cumpliría la finalidad de fomentar la continuidad de las actividades de exploración que posteriormente podrían incrementar la cantidad de proyectos ejecutados en nuestro país, con los consecuentes beneficios en el incremento del empleo, el desarrollo de las localidades involucradas en los proyectos mineros y de hidrocarburos y, en el balance, los mayores ingresos para el fisco.

En cuanto al plazo propuesto como prórroga de los beneficios tributarios establecidos en las Leyes 27623 y 27624, sin desconocer que el alto costo de inversión que representa la actividad de exploración en minería e hidrocarburos se

incrementa no solo por el nivel de incertidumbre de hallazgo de recursos explotables que caracteriza a esta etapa, sino también por factores como las dificultades en la obtención de permisos, conflictos sociales, precios internacionales, entre otros; la Comisión considera que el argumento consignado por el Poder Ejecutivo en la sustentación del Proyecto de Ley 3195/2022-PE, respecto a que la incertidumbre global producto de la pandemia y las cuestiones geopolíticas a nivel internacional que influyen en la toma de decisiones de los inversionistas, amerita que, de manera excepcional, el plazo de la prorroga se extienda hasta los 5 años, no constituye un argumento suficiente para violentar las reglas que en materia de plazos de prórrogas de incentivos o beneficios tributarios establece el Código Tributario,

Sobre el particular, cabe mencionar que la crisis económica mundial generada por la pandemia de la Covid-19 no ha sido la única en ocurrir desde la dación de las Leyes 27623 y 27624[2]. En efecto, la primera crisis financiera internacional del siglo XXI estalló en el 2007 en los Estados Unidos y otras economías avanzadas. Aquella fue una crisis que, a partir de finales del 2008, adquirió proporciones globales. Fue en esencia, una crisis de sobreendeudamiento, que colapsó el sistema financiero de los Estados Unidos y tuvo efectos devastadores sobre el sector productivo de la economía, afectando a América Latina y otras economías emergentes, como China y la India, e incluso causando impactos en economías más sólidas como las de los países de Europa.

El Perú no fue ajeno a dicha crisis, sin embargo ello no fue óbice para respetar y mantener las reglas establecidas en el inciso g) de la Norma VII del Código Tributario para la prórroga de los incentivos o beneficios tributarios, el cual dispone taxativamente lo siguiente:

[2] Ambas con fecha de Publicación el 8 de enero de 2002

*"**Norma VII: REGLAS GENERALES PARA LA DACIÓN DE EXONERACIONES, INCENTIVOS O BENEFICIOS TRIBUTARIOS***

La dación de normas legales que contengan exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios, se sujetarán a las siguientes reglas:

(...)

g) Se podrá aprobar, por única vez, la prórroga de la exoneración, incentivo o beneficio tributario por un período de hasta tres (3) años, contado a partir del término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario a prorrogar.

Para la aprobación de la prórroga se requiere necesariamente de la evaluación por parte del sector respectivo del impacto de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, a través de factores o aspectos sociales, económicos, administrativos, su influencia respecto a las zonas, actividades o sujetos beneficiados, incremento de las inversiones y generación de empleo directo, así como el correspondiente costo fiscal, que sustente la necesidad de su permanencia. Esta evaluación deberá ser efectuada por lo menos un (1) año antes del término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario.

La Ley o norma con rango de ley que aprueba la prórroga deberá expedirse antes del término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario. No hay prórroga tácita.

(...)"

En tal sentido, La Comisión considera que, autorizar la prórroga de los beneficios tributarios establecidos en las Leyes 27623 y 27624 por el plazo de tres años, de conformidad con lo establecido por el Código Tributario, no implica ningún desmedro en la propuesta del Proyecto de Ley 3195/2022-PE, en tanto mantiene la práctica seguida para dichos beneficios desde el 2006, fecha de la primera prorroga y no implica el incremento del nivel de incertidumbre que las actividades de exploración minera y de hidrocarburos representan per se.

VII. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Según la relación de principales gastos tributarios al 2023 presentada por SUNAT en el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026 (MMM 2023 – 2026), los beneficios tributarios del que gozan los sectores beneficiados ascienden a S/ 49 millones. A continuación se detalla el desglose por actividad.

Tabla 1. Costo fiscal potencial

Sector	Tributo	Beneficio devuelto	Costo 2023 (S/ miles)
Minería	IGV	Devolución a titulares de la actividad minera - fase exploración	24 981
Hidrocarburos	IGV	Actividades vinculadas a la exploración - compras internas	24 012
Total			**48 993**

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026

Como se desprende de la observación de la tabla arriba consignada, la prórroga de estos beneficios no implicará un costo adicional al erario debido a que ya se encuentran incorporados en las proyecciones de ingresos y gastos del aludido Marco Macroeconómico Multianual - MMM 2023 – 2026.

Cabe resaltar que la actual Cartera de Exploración Minera, contempla 63 proyectos con un monto global de inversión de US$ 586 millones y los montos por inversión tanto del sector minero como petrolero vienen reduciéndose en los últimos años.

En ese sentido, si no se prorrogan estas Leyes cabría la probabilidad de que se paralicen las inversiones en exploraciones.

Por otro lado, los beneficios que se esperan por el desarrollo de las actividades económicas pueden ser visibilizados desde distintos aspectos como:

- La continuidad de inversiones en exploración
- Aportes al Tesoro Público a través de la recaudación de diversos tributos
- La generación de empleo local en las zonas de las inversiones y en actividades conexas.

VIII. TEXTO SUSTITUTORIO

A partir del estudio y análisis realizados se plantea un texto sustitutorio que considera:

- El objeto de la ley conserva el espíritu de prorrogar la vigencia de las Leyes 27623 y 27624.
- El dictamen contiene tres artículos y una Disposición Complementaria Final.
- El artículo 2 prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624 hasta el 31 de diciembre de 2027.
- El artículo 3 incorpora indicadores de transparencia relacionados a la relación de contratos, inversionistas y monto total en exploraciones.
- La Única Disposición Complementaria Final indica el inicio a partir del 1 de enero de 2023.

Si bien el Código Tributario establece que toda exoneración, incentivo o beneficio tributario puede ser prorrogado por un plazo máximo de tres (3) años, la Comisión consideró conveniente tomar en cuenta la propuesta alcanzada por el Poder Ejecutivo sobre la prórroga de cinco (5) años, dado que, según la exposición de motivos del proyecto de ley, la fase de exploración es altamente riesgosa y requiere de una alta inversión. Adicionalmente, se ha estimado que estos proyectos se

ejecutaron en promedio en 4,4 años. Asimismo, se tomaron en consideración los argumentos expuestos por los congresistas en el mismo sentido durante el debate del tema en la Sesión de la Comisión.

IX. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, recomienda de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, la **APROBACIÓN** del Proyecto de Ley 3195/2022-PE con el siguiente texto sustitutorio:

El Congreso de la República,

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE LAS LEYES 27623 Y 27624

Artículo 1. Objeto y fin de la Ley

La presente ley tiene por objeto prorrogar la vigencia de la Ley 27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, y la Ley 27624, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos, con la finalidad de promover la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos y propiciar así el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.

Artículo 2. Prórroga

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de las siguientes leyes:

a) Ley 27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración.
b) Ley 27624, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos.

Artículo 3. Transparencia

El Ministerio de Energía y Minas publica anualmente en su Portal Institucional la siguiente información vinculada a la aplicación de la presente ley:

a) La relación de contratos, inversionistas y monto total de las inversiones en exploración minera y de hidrocarburos comprometida.
b) La relación de contratos, inversionistas y monto total de las inversiones en exploración minera y de hidrocarburos comprometida y acogida en el marco de la presente ley.
c) La relación de contratos, inversionistas y monto total de devolución otorgada en acogimiento de lo regulado en la presente ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia

La presente ley entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2023.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Soledad FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 15:23:50-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 16:24:13-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 15:15:29-0500

Salvo mejor parecer.
Dese cuenta.
Sala de la Comisión

Lima, 2 de noviembre de 2022

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES RUIZ Victor Seferino FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/11/2022 11:14:28-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/11/2022 12:36:43-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIZARZABURU LIZARZABURU Juan Carlos Martin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 15:02:18-0500

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624".

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTEZA FACHO Silvia Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 17:39:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZALES DELGADO Diana Carolina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/11/2022 11:00:49-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 11:14:32-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ANDERSON RAMIREZ Carlos Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/11/2022 10:40:44-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/11/2022 09:59:40-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/11/2022 11:42:40-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO FIR 16655831 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2022 10:08:45-0500

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624".

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JERI ORE Jose Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:45:50-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HERRERA MEDINA Noelia Rossvith FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 10:52:50-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/11/2022 06:54:40-0500

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA (CEBFIF)

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

ACTA DE LA SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL)
MIÉRCOLES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

Siendo las 9 horas y 44 minutos del miércoles 02 de noviembre de 2022, a través de la plataforma Microsoft Teams/Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, se reunieron los miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF), para realizar la Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión, bajo la presidencia de la Señora Congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes, quien dio la bienvenida a los señores congresistas y dispuso la verificación del quorum para iniciar la sesión.

Se encontraban presentes los señores congresistas miembros titulares, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Guido Bellido Ugarte, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Ceferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Silvia María Monteza Facho, Juan Carlos Mori Celis, María Grimaneza Acuña Peralta, Rosio Torres Salinas, Álex Antonio Paredes Gonzales, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Isabel Cortez Aguirre, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez. Asimismo, se encontraba presente la Señora Congresista miembro accesitario Diana Carolina Gonzales Delgado. Justificaron su inasistencia los señores congresistas Alejandro Enrique Cavero Alva, Betssy Betzabet Chávez Chino y José León Luna Gálvez.

Con el quórum de Reglamento se dio inicio a la Sétima Sesión Ordinaria.

APROBACIÓN DE ACTA

La Presidenta puso en observación el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 19 de octubre de 2022, siendo aprobada.

DESPACHO

La Presidenta dio cuenta de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión cuyos cuadros habían sido repartidos junto con la Agenda para la presente sesión. Señaló que si alguno de los señores Congresistas requiriera copia de alguno de los documentos allí consignados puede solicitarla a la Secretaría Técnica.

Asimismo, se dio cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la Comisión cuyo cuadro había sido repartido junto con la Agenda para la presente sesión.

INFORMES

No hubo informes.

PEDIDOS

La Presidencia hizo un pedido para ampliar la agenda con la finalidad de incorporar la sustentación del Proyecto de Ley 1921/2021-CR, que propone la "Ley que destina al fondo educativo del Callao el 20% de los recursos proveniente de la participación en renta de aduana" a cargo de la Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina. Este pedido pasó al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta señaló que se encontraba programada en el primer punto del Orden del Día de la presente sesión la sustentación del Proyecto de Ley 2065/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Democrático, a iniciativa del Congresista Luis Roberto Kamiche Morante, que propone la "Ley que dispone la devolución del 100% de saldos de aportes previsionales a los aportantes y ex aportantes del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), mayores de 40 años de edad".

El Señor Congresista Luis Roberto Kamiche Morante señaló que el objeto de la norma es la devolución del 100% de aportes previsionales a los aportantes y ex aportantes del sistema privado de administración de fondos de pensiones, mayores de 40 años de edad. Señaló, asimismo, que considerando el monto de sus aportes, el retiro que han hecho de los mismos en los dos últimos años, la dificultad para conseguir un empleo para seguir aportando al sistema previsional y la actual crisis económica que se sigue profundizando, la situación de los aportantes y no aportantes mayores de 40 años es totalmente crítica y debe ser atendida con prioridad. Agregó que resultaría un acto de injusticia negarles este derecho facultativo de acceder a sus fondos, con el argumento que "los ahorros garantizan el bienestar en su vejez" cuando todos sabemos que el monto de aportes que poseen, la dificultad de conseguir empleo después de los 40 años para seguir aportando y la disminución sistemática del valor de sus ahorros; harán imposible que los aportantes que ahora son mayores de 40 años reciban una pensión de jubilación que les permita siquiera "sobrevivir". Señaló también que la propuesta pretende beneficiar socialmente a los titulares de las cuentas individuales de capitalización de fondos de pensiones de aportantes y ex aportantes mayores de 40 años que, considerando la cantidad de aportes que poseen y la dificultad que existe para que accedan a un empleo que les permita seguir aportando; están prácticamente condenados a esperar largos años para recibir como pensión montos irrisorios o a perderlos con el transcurrir de los años por efecto de la disminución del valor de los aportes.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el segundo punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2259/2021-CR, que propone la "Ley de Nacionalización del cobre y creación de la empresa Nacional Las Bambas SAC", y que recomienda su no aprobación y envío al archivo.

La Presidenta señaló que la propuesta tiene por objeto normar la explotación de los recursos cupríferos existentes en el territorio nacional con la finalidad de garantizar la propiedad nacional sobre el cobre en estado natural en el subsuelo, el reconocimiento de su valor económico, optimizar la distribución de la riqueza que su explotación genera e impulsar el desarrollo nacional desde el interior del país. Señaló, asimismo, que trasladar la explotación del cobre del sector privado al sector público podría significar la reducción de producción de cobre, la reducción en recaudación que percibe el Tesoro Público, menores transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales y Locales, lo cual impactaría en una mayor brecha de servicios públicos para la población y perjudica el desarrollo del país. Agregó que la iniciativa legislativa busca crear la Corporación Nacional del Cobre y la Empresa Nacional Las Bambas SAC para explorar y explotar cobre en el país y en comunidades de la provincia de Cotabambas, respectivamente.

La Presidenta dijo que el artículo 60 de la Constitución establece que sólo por ley expresa es posible crear empresas del Estado, pero cuando dicha participación estatal tenga carácter subsidiario, es decir, que el Estado podría crear empresas públicas para atender sectores sociales o económicos que no reciben atención por parte de las empresas privadas; sin embargo, este no es el caso del sector minero, dado que su desarrollo histórico en el país se fundamenta en la inversión de empresas que exploran y explotan recursos naturales.

La Presidenta señaló, asimismo, que según el artículo 66 de la Constitución los recursos naturales son patrimonio de la Nación y dispone que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión entregada otorga a su titular un derecho real. Agregó que, en la misma línea, el artículo 4 de la Ley 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, establece que los recursos naturales son Patrimonio de la Nación; sin embargo, los frutos y productos son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Dijo que, en ese sentido, el proyecto de ley vulnera la libertad de iniciativa privada al tratar de trasgredir los derechos reales otorgados a los inversionistas a través de las concesiones, al no respetar los contratos ni mecanismos de mercado para atraer inversión al país.

La Presidenta dijo que el artículo 70 de la Constitución señala que "el derecho de la propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. Añadió que, además, "a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio". Dijo que en la iniciativa legislativa, lo referido al control de la explotación del cobre, es un acto de expropiación que no se alcanza a justificar por razones de seguridad o necesidad pública.

La Presidenta dijo también que el artículo 10 de la iniciativa legislativa, que establece la valorización de las empresas privadas en operaciones y que serían expropiadas, el planteamiento no corresponde a un cálculo económico adecuado pues no refleja el valor presente esperado de los flujos futuros para los inversionistas. Agregó que dicho artículo también considera la deducción de "exportación de utilidades" y el "valor del recurso en el subsuelo que ha omitido pagar", ambos conceptos carecen de sustento técnico debido al régimen de libre movilidad de capitales en el que nos encontramos. Dijo que tampoco toma en consideración las regalías que se han pagado al Estado por la extracción de los recursos. Dijo, asimismo, que, en síntesis, la propuesta no ofrecería un justiprecio por la expropiación de las empresas mineras. Señaló además que la propuesta establece que el Estado deberá asignar del Fondo de Contingencias del Presupuesto del año Fiscal 2022 hasta S/ 3 000 millones como aporte estatal para ser distribuidos entre las unidades

empresariales. Sin embargo, según el artículo 79 de la Constitución, el Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.

La Presidenta señaló que, por último, históricamente se ha podido visibilizar que las empresas estatales constituyeron las principales fuentes del desorden fiscal en el país, generando grandes pérdidas para el fisco e ineficiencia en los mercados, llevando al país a niveles de hiperinflación y recesión económica sin precedentes. Dijo que solamente el pago del justiprecio por la expropiación de las empresas que actualmente se encuentran en operación le costaría al país miles de millones de dólares, costo que no es analizado en la propuesta. Agregó que tampoco se fundamenta las fuentes de financiamiento del mismo y que actualmente el país se encuentra en un contexto post pandemia caracterizado por un bajo crecimiento económico y altos niveles de inflación. Dijo que, en ese sentido, es de necesidad atraer y promover inversiones hacia el país, así como un manejo adecuado de las cuentas fiscales y no lo contrario.

La Presidenta señaló, finalmente, que el proyecto de ley había recibido opiniones negativas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La Presidenta puso al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2259/2021-CR, que propone la "Ley de Nacionalización del cobre y creación de la empresa Nacional Las Bambas SAC", y que recomienda su no aprobación y envío al archivo; fue aprobado por mayoría; con catorce (14) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez; cuatro (04) en contra, de los señores congresistas Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Alex Antonio Paredes Gonzales, Germán Adolfo Tacuri Valdivia e Isabel Cortez Aguirre; y tres (03) abstenciones, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Segundo Toribio Montalvo Cubas y Rosio Torres Salinas.

Seguidamente, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el tercer punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 596/2021-CR, que propone la "Ley que modifica la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional".

La Presidenta señaló que el presente dictamen tiene por objeto: i) Modificar los artículos 1 y 4 de la Ley 27889, a fin que el Fondo incluya el "fortalecimiento de la diversidad cultural" (artículo 1); y, ii) Incluir al Ministerio de Cultura en el Comité Especial encargado de proponer al MINCETUR el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional (artículo 2), y velar de ese modo por nuestra diversidad cultural, la protección, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, en las actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional que se pretendan efectuar. Señaló, asimismo que, la incorporación del término "Fortalecimiento de la Diversidad Cultural", es importante debido a que se encuentra enmarcado con la Política Nacional de Cultura al 2030. Agregó que, en efecto, el Perú es un país pluricultural y multiétnico que alberga a lo largo de su territorio un sinnúmero de manifestaciones culturales ancestrales y contemporáneas, emanadas de la creatividad individual y/o colectiva y de la multiplicidad e interacción de los grupos culturales que coexisten en nuestra sociedad. Prueba de ello es nuestro vasto patrimonio cultural, nuestra diversidad

de expresiones artístico-culturales, nuestras industrias culturales, y nuestra heterogeneidad étnica de individuos y colectivos.

La Presidenta agregó que, respecto a incorporar al Ministerio de Cultura en el Comité Especial encargado de proponer el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo 005-2013-MC; el Ministerio de Cultura es competente en materia de cultura a lo largo del territorio nacional, comprende al Sector Cultura, constituyéndose en su ente rector. Dijo que, en consecuencia, es pertinente su participación en lo que comprende la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, como parte integrante del Comité Especial para proponer el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.

La Presidenta señaló, finalmente, que mediante la Primera Disposición Final de la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, se estableció un plazo de aplicación de 10 años. Este plazo fue ampliado por 10 años más mediante la Ley 29796. Por ello, habiéndose advertido la necesidad de ampliación de la vigencia de la Ley 27889 modificada por la Ley 29796, es oportuna la modificación de la Ley 29796, debiendo ser modificada para que la vigencia de la Ley 27889 sea de 20 años; conforme a la recomendación planteada por el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales a través del Proveído 000155-2022-VMPCIC/MC que remite el Informe 000004-2022-DGDP/MC de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 596/2021-CR, que propone la "Ley que modifica la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional"; fue aprobado por mayoría; con diecisiete (17) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Isabel Cortez Aguirre, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez; uno (01) en contra, del Señor Congresista Guido Bellido Ugarte; y tres (03) abstenciones, de los señores congresistas Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Alex Antonio Paredes Gonzales y Germán Adolfo Tacuri Valdivia.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programada en el cuarto punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, que propone la "Ley de las Organizaciones Deportivas dedicadas a la práctica del fútbol".

La Presidenta señaló que el dictamen propone la Ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol y tiene por objeto establecer las medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional, procurar el acceso a la inversión privada y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones deportivas. Dijo que, asimismo, se propone dar el marco legal necesario a fin de que las organizaciones deportivas logren su sostenibilidad integral, así como establecer las reglas necesarias para viabilizar el pago y concluir satisfactoriamente los procesos concursales y post concursales, en condiciones de equidad, para todos los acreedores.

La Presidenta señaló que la propuesta legislativa define, en primer lugar, el sentido de la sostenibilidad de las organizaciones deportivas, que plantea, estableciendo en su artículo 3 la necesidad de promover la canalización de la inversión privada en el mejoramiento, ampliación y creación de la infraestructura deportiva de titularidad pública mediante esquemas legales de colaboración pública, esperando mejorar la competitividad del futbol profesional a nivel nacional e internacional, generando una serie de impactos en diversas actividades económicas asociadas directa e indirectamente con dicha disciplina, produciendo un aumento en la recaudación de los tributos generados a favor del Estado. Agregó que, en ese sentido, se permite que las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol adopten formas societarias que otorguen garantías adecuadas para su fortalecimiento patrimonial, permitiendo que las inversiones sean realizadas en su infraestructura, la formación de menores, los laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas y el pago de sus costos y los gastos de operación debidamente gestionados a través de estructuras transparentes, sujetas a las normas del buen gobierno corporativo, de integridad y de cumplimiento.

La Presidenta agregó que, en segundo lugar, en el artículo 4 del texto normativo propuesto, se propone mejorar la capacidad de inversión de las organizaciones deportivas, abriendo la posibilidad de manera explícita, a que estas puedan realizar inversiones en infraestructura, en el marco de la normatividad vigente relativa a concesiones y obras por impuestos, con el doble impacto, benéfico, en este último caso, pues la norma se orienta a fomentar la inversión directa en infraestructura deportiva y a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario y no tributario que puedan generar las actividades de dichas organizaciones.

La Presidenta dijo que, en tercer lugar, en su artículo 5, se establece un Régimen Especial de Pago de las Obligaciones Tributarias y No Tributarias y para ello se propone el acogimiento al régimen especial regulado en la iniciativa legislativa, requiriendo como condición previa que las organizaciones deportivas acrediten el cumplimiento de las acciones que garanticen su sostenibilidad integral en el largo plazo, a través de un Plan de Viabilidad. Agregó que las deudas materia de acogimiento comprenden, con carácter enunciativo, a todas las obligaciones correspondientes a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Predial y los arbitrios, tasas y contribuciones de las que sean titulares el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, así como a cualquier otra, incluso de carácter no tributario que se encuentre bajo administración de la SUNAT.

La Presidenta señaló también que, un cuarto conjunto de disposiciones establecidas en el artículo 6, señalan medidas aplicables a las Organizaciones Deportivas en situación de Concurso a que se refiere la Ley 31279, es decir respecto a la "Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú". Entre las cuales se contemplan, la suspensión de normas legales y de procedimientos administrativos, actividades a ser ejecutadas durante el período de suspensión. Añadió que, con ello, la presente norma permitiría concluir con una serie de acciones administrativas y judiciales cuyos costos e impactos han sido notoriamente perjudiciales para todos los actores involucrados en la práctica del fútbol profesional, los cuales han venido irrogando considerables recursos al Estado y a los órganos de administración de justicia.

La Presidenta agregó que, finalmente, en el artículo 7 del texto normativo propuesto, se establece que la una vez recibido el informe de auditoría a que se refiere el literal b) del inciso 6.2 del artículo 6, corresponde a la Contraloría General de la República realizar las acciones de control para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en

el Perú, respecto de presuntas irregularidades en los procedimientos concursales seguidos a los clubes de fútbol profesional, así como en todos los aspectos comprendidos en la presente norma, de acuerdo con el alcance de las competencias de la máxima autoridad de control.

Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, que propone la "Ley de las Organizaciones Deportivas dedicadas a la práctica del fútbol", fue aprobado por mayoría; con once (11) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Diana Carolina Gonzales Delgado, en calidad de accesitaria de Alejandro Enrique Cavero Alva; seis (06) en contra, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Tania Estefany Ramírez García, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Jorge Carlos Montoya Manriquey, Isabel Cortez Aguirre y Carlos Antonio Anderson Ramírez; y cuatro (04) abstenciones, de los señores congresistas Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Noelia Rossvith Herrera Medina.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el quinto punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624".

La Presidenta señaló que la propuesta tiene por objeto prorrogar la vigencia de la Ley 27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, y la Ley 27624, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos; a fin de promover la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos y así propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Agregó que históricamente la actividad minera y de hidrocarburos ha sido de gran relevancia en el crecimiento económico del país; principalmente, a través de la producción, exportaciones, generación de empleo y generación de recursos para el Tesoro Público. Dijo que, no obstante, en los últimos años se aprecia la reducción de las inversiones en exploraciones en ambas actividades, así como el descenso en el Índice Fraser de atractivo para invertir. Agregó que, en efecto, para el 2021, el Índice Fraser de atractivo para invertir posiciona al Perú en el puesto 42 de 84 ciudades y países incluidos en la comparativa.

La Presidenta señaló, asimismo, que en la actualidad el Perú se encuentra en un contexto post pandemia caracterizado por un bajo crecimiento económico y altos niveles de inflación. Dijo, además, que las proyecciones de crecimiento a nivel mundial y local siguen reduciéndose para los próximos años y, en ese sentido, es necesario seguir promoviendo la inversión en el país de manera que la dinámica económica producida por las actividades de minería e hidrocarburos puedan generar empleo y recursos para seguir desarrollando el país. Dijo que, en atención a lo expuesto, con el objetivo de impulsar el gasto privado y la recuperación de la confianza de los agentes económicos, el dictamen plantea una medida que promueve un entorno favorable para el desarrollo de inversiones e impulsa la reactivación de la economía, incluyendo mecanismos de alivio tributario orientados a fomentar la inversión privada.

La Presidenta señaló, finalmente, que estando fijado el vencimiento de la vigencia de los beneficios tributarios de las Leyes 27623 y 27624 para el 31 de diciembre de 2022 conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia 021-2019 y, considerando que la

eliminación de los mismos sería sumamente perjudiciales en la medida que afectarían el desarrollo de más proyectos mineros y de hidrocarburos e implicarían la pérdida de los ingresos provenientes de estas actividades, la Comisión encuentra conveniente y necesaria la prórroga de la vigencia de las leyes que permita asegurar la continuidad de las operaciones en mención.

Luego del debate la Presidenta recogió la propuesta de prorrogar la vigencia de las Leyes 27623 y 27624 hasta el 31 de diciembre de 2027. Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624", fue aprobado por mayoría; con dieciséis (16) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, José Enrique Jerí Oré, Carlos Antonio Anderson Ramírez y Diana Carolina Gonzales Delgado, en calidad de accesitaria de Alejandro Enrique Cavero Alva; uno (01) en contra, de la Señora Congresista Isabel Cortez Aguirre; y cuatro (04) abstenciones, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Carlos Javier Zeballos Madariaga.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programada en el sexto punto del Orden del Día de la presente sesión la sustentación del Proyecto de Ley 1755/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Ilich Fredy López Ureña, que propone la "Ley que modifica el Decreto de Urgencia 037-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias complementarias en materia económica y financiera orientadas al fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas, respecto del fortalecimiento patrimonial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".

El Señor Congresista Ilich Fredy López Ureña señaló que la finalidad de la iniciativa es el fortalecimiento patrimonial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito mediante una transferencia excepcional y por única vez, de recursos en el marco del numeral 5.3. del artículo 5 del Decreto de Urgencia 037-2021 destinados exclusivamente para aporte de capital. Agregó que se plantea la creación del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas. Señaló, asimismo, que el costo es el 70% de los recursos del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Microfinancieras y que los beneficios son i) El fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito como herramienta y brazo financiero del Estado, fomentando su crecimiento y sostenibilidad; ii) El impulso al crédito a las MYPES y sectores vulnerables; iii) La reducción de los niveles de pobreza teniendo como vehículo la inclusión financiera; iv) La mejora de la clasificación de riego de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, permitiéndoles acceder a líneas de crédito con menores tasas de interés, en beneficio de sus clientes; y, v) El contar con nuevos recursos de liquidez para apoyar la recuperación económica a través del financiamiento a la MYPES y tener una mayor cobertura para atender a los clientes potenciales. Añadió que la presente iniciativa no genera mayores gastos al erario nacional, ya que, el programa de fortalecimiento patrimonial cuenta con fuente de financiamiento.

Seguidamente, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el sétimo punto del Orden del Día de la presente sesión el pedido para ampliar la agenda con la finalidad de incorporar la sustentación del Proyecto de Ley 1921/2021-CR, que propone la "Ley que destina al fondo educativo del Callao el 20 por ciento de los recursos proveniente de la

participación en renta de aduana" a cargo de la Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina.

Puesto al voto el pedido de ampliación de agenda, fue aprobado por unanimidad con diecinueve (19) votos a favor; de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Guido Bellido Ugarte, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Ceferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Silvia María Monteza Facho, Juan Carlos Mori Celis, María Grimaneza Acuña Peralta, Rosio Torres Salinas, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Isabel Cortez Aguirre, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez.

A continuación, la Presidenta cedió el uso de la palabra a la Señora Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina, quien señaló que la presente iniciativa tiene por objeto incrementar el monto de los recursos que se destinan al Fondo Educativo del Callao, provenientes de la Participación en Renta de Aduanas. Señaló, asimismo, que para tal efecto se plantea modificar el artículo único de la Ley 30915, Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 27613, Ley de Participación en Renta de Aduanas, modificado por el artículo 1 de la Ley 30578, ampliando el factor correspondiente al Fondo Educativo del Callao-CAFED del 10% al 20%.

Agregó que la presente iniciativa modifica los términos de la Ley 27613, guardando concordancia con otros dispositivos como la Ley 30878, en concordancia con el Decreto Supremo 164-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la política general del gobierno para el periodo 2021 -2026, en especial el Eje 3, sobre impulso de la ciencia, tecnología e innovación; y el Eje 4, sobre fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. Señaló también que la iniciativa legislativa no irroga gasto al erario nacional en tanto que no se crea un nuevo tributo, sino representa el cambio en la distribución del gasto del Gobierno Regional del Callao al Fondo Educativo del Callao donde se verán beneficiados un estimado de 180,000 alumnos de la escuela pública del Callao y aproximadamente 15,000 estudiantes de educación superior universitaria, creando nuevas oportunidades a los jóvenes chalacos, al fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad y el desarrollo del capital humano en la Región Callao.

Finalmente, la Presidenta solicitó la dispensa del trámite de aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos tratados en la sesión, siendo aprobada.

Siendo las 13 horas y 49 minutos, se levantó la sesión.

Se deja constancia de que se considera parte integrante de la presente Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión.

Rosangella Andrea Barbarán Reyes
Presidenta

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 19:19:32-0500

Ilich Fredy López Ureña
Secretario

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 10:34:12-0500

Lima, 14 de noviembre de 2022

OFICIO Nº 580-2021-2026-DC-RTS/CR

Señora:
ROSANGELLA BARBARAN REYES
Presidenta de la Comisión de Economia, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

Lima. -

Asunto: **Imposibilidad de firma digital por problemas con el Certificado digital RENIEC.**

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, e informarle que la Congresista **Rosio Torres Salinas** titular de la Comisión, no puede firmar digitalmente los Dictámenes aprobados por la Comisión, por cuanto hasta la fecha RENIEC no ha enviado la autorización del Certificado Digital, habiendo recibido la información vía correo que el trámite se dará dentro de tres días hábiles.

Sin otro particular, me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Jesús Humberto SIERRA TAPIA
Asesor Principal